



Escena Medioambiental en Chile

Elementos para una discusión

Environmental Perspective in Chile

Items for discussion

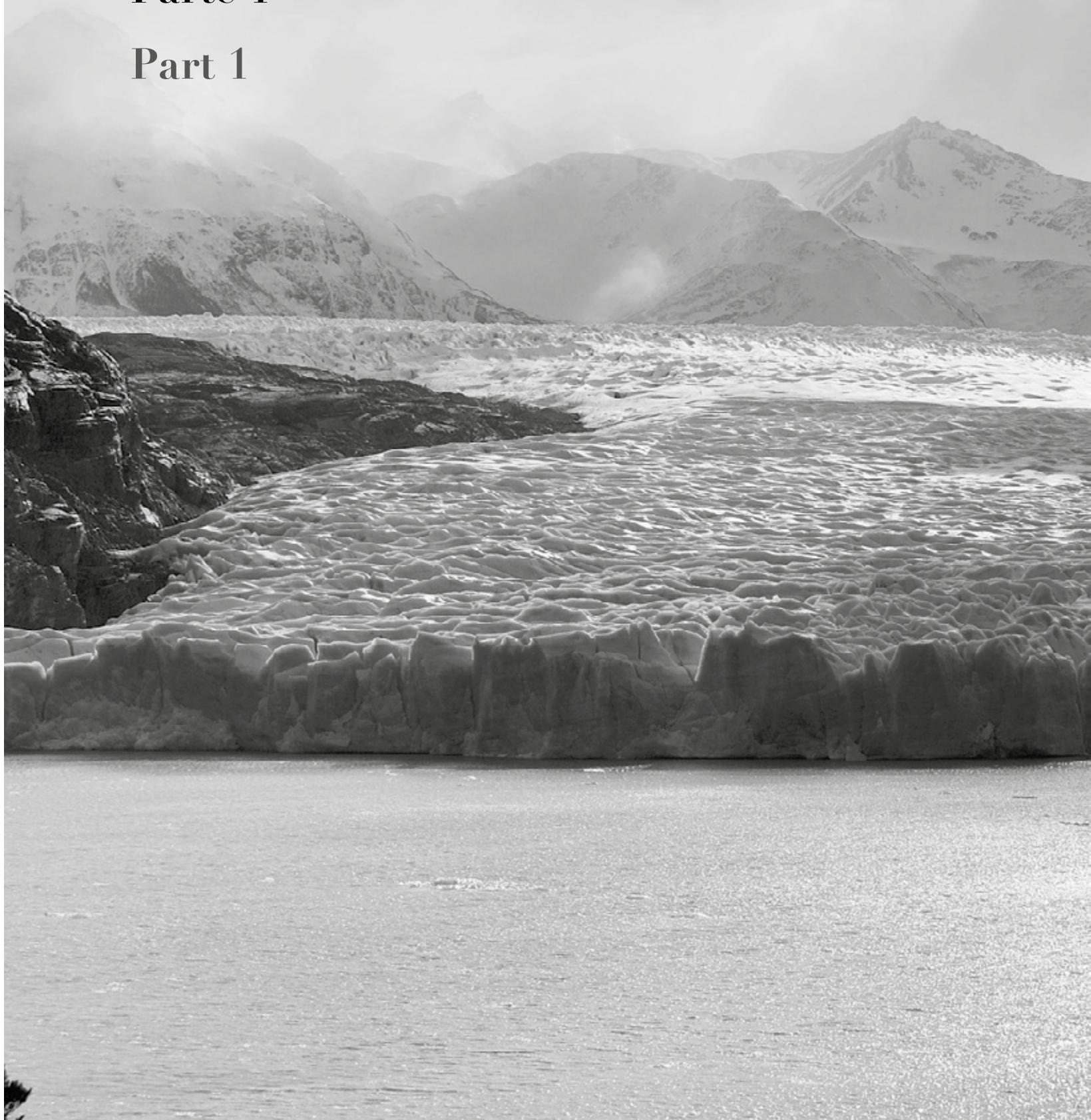


Índice

• Parte 1 , autor Fundación Punta de Lobos.	
• Introducción/ Introduction.	5
• Atmósfera de Competencia v/s Colaboración en el Mundo Medioambiental. Competition v/s Collaboration in the Environmental Sphere.	6
• Agencias Regulatorias: El Caso de California. Regulatory Agencies: The Case of California.	10
• Desafíos a la Institucionalidad Chilena. Challenges Facing the Chilean Institutional Framework.	13
• El Rol de la Filantropía/ The Role of Philanthropy.	16/ 17
• Discusión/ Discussion.	20
• Referencias/ References.	22
• Parte 2, autor Geute: Hacia la Filantropía Ambiental.	
Towards Environmental Philanthropy.	23
• Panorama Actual de las OSC en Chile/ Overview of CSOs in Chile.	25
• Financiamiento de las OSC y Filantropía. Financing of the CSOs and Philanthropy.	26
• Sobre la Legislación Tributaria en Materia de Filantropía. Tax Legislation in Philanthropic Matters.	32
• Sobre el Proyecto de Ley Única de Donaciones. The Sole Donations Bill of Law.	34
• Incentivos Tributarios en el SEIA y Biobancos. Tax Incentives in the EIAs and Biobanks.	38
• Conclusiones/ Conclusions.	40
• Bibliografía/ Bibliography.	42

Parte 1

Part 1





1.

Introducción

El escenario actual de Conservación Ambiental en Chile se encuentra en una etapa de importantes desafíos, con un creciente interés e incorporación de nuevos agentes y organizaciones a la escena. Se observa una multitud de actores por parte del mundo privado - tanto a nivel nacional como internacional - realizando esfuerzos en distintos frentes para abordar las problemáticas más urgentes de conservación, y sustentabilidad de nuestros ecosistemas y recursos naturales.

Pese a que este escenario parece alentador, es importante observar que, en un contexto de crecimiento económico, desarrollo industrial y urbanístico, transformaciones institucionales, relativa inestabilidad de los sistemas de gobernanza y, sobre todo, un planeta amenazado por un cambio climático imposible de cuestionar, **la falta de un modelo que articule de manera integrada y efectiva todos los esfuerzos y acciones tendientes a la conservación, administración, planificación, y regulación de los ecosistemas de Chile, puede poner en riesgo el logro de objetivos comunes que alcancen un nivel institucional, e impactos reales a largo plazo.**

Frente a lo anterior, surge la necesidad de discutir sobre posibles instrumentos que permitan una administración eco-sistémica eficaz y eficiente, que contemple la coordinación de los esfuerzos privados. Lo anterior surge a favor de maximizar el cuidado por el medioambiente y patrimonio natural de Chile, a medida que el país avanza en su desarrollo. **El presente documento busca dilucidar ciertos elementos centrales, con el fin de dar inicio una discusión que permita indagar en los tipos de estructura que puedan ser favorables a la cooperación y al encadenamiento de esfuerzos.** En particular, este documento se centra en los potenciales de aplicabilidad de modelos de referencia, que permitan acortar brechas en temas de regulación, financiamiento, administración, implementación y gestión, para una manejo sostenible de las riquezas naturales que tiene Chile, que además de ser relevantes para la salud del planeta, representan los sitios que entregan el bienestar a la población humana.

Introduction

Environmental Conservation in Chile is currently facing significant challenges, with growing interest and the incorporation of new agents and organizations. There are numerous domestic and international private-sector stakeholders taking action on different fronts to address the most urgent issues of conservation and sustainability of our ecosystems and natural resources.

Despite an encouraging outlook, it is worth mentioning that in a context of economic, industrial and urban growth, institutional transformations, relative instability of governance systems, and above all, a planet threatened by climate change impossible to deny, **the lack of a model that comprehensively and effectively articulates all efforts and actions aimed at the conservation, management, planning and regulation of ecosystems in Chile, can jeopardize the achievement of common objectives at an institutional level and real long-term impacts.**

Given the above, the need arises to discuss instruments that would enable effective, efficient, eco-systemic management, requiring the coordination of private initiatives for enhancing the care of the environment and Chile's natural heritage as the country develops. **This paper seeks to shed light on certain central elements, aimed at initiating a discussion that would enable exploring the types of structures that would be favorable for cooperation and coordinating initiatives.** It focuses particularly on the potential application of reference models that could provide shortcuts in terms of regulation, financing, administration and implementation for sustainable management of Chile's natural resources, which in addition to being relevant to the health of the planet, provide well-being to the human population.

Atmósfera de Competencia v/s Colaboración en el Mundo Medioambiental

Las dinámicas de competencia y colaboración operan según distintas lógicas en organizaciones con y sin fines de lucro. En las organizaciones sin fines de lucro, puede existir competencia para obtener recursos de financiamiento, por la búsqueda de prestigio individual, o simplemente por la existencia de obstáculos a la cooperación, debida a bajos niveles de confianza. Por otro lado, la colaboración surge –entre otras razones– cuando existe la necesidad de intercambiar conocimientos y experiencias para potenciar recursos que generen sinergias hacia el logro de objetivos en común, que no son alcanzables de manera individual.

Según un diagnóstico preliminar realizado por Fundación Punta de Lobos, sólo en el mundo de la conservación marina y costera, se observan actualmente cerca de 150 actores privados con proyectos vigentes en el territorio nacional – entre organizaciones no gubernamentales (ONGs), fundaciones, corporaciones y asociaciones gremiales. Aunque todavía hace falta profundizar en las distintas áreas de trabajo que se mueven los distintos actores – así como también en sus dinámicas operativas – **surge la necesidad de reflexionar acerca de los posibles efectos que una eventual fragmentación y su consecuente duplicación de esfuerzos, pueda generar en el logro de objetivos comunes de largo plazo a nivel nacional.**

Por un lado, se puede argumentar que una multitud de actores con objetivos similares, pero trabajando por vertientes distintas, genera una dispersión de esfuerzos y recursos, produciendo traslapos y perdiendo de vista los objetivos en común que subyacen a estas organizaciones. Quizás lo anterior impida el avance hacia logros de mayor impacto y de largo plazo. Sin embargo, bajo otra mirada, podría argumentarse que la competencia genera un mayor flujo de recursos filantrópicos, que permite cubrir un mayor número de actores y diversidad de necesidades a lo largo del territorio, entre otros beneficios. En otras palabras, es necesario preguntarse lo siguiente; **¿podrá ser que, en realidad, ninguna de las dos atmósferas – competitiva o colaborativa – sean negativas, si no que ambas son necesarias en tiempos [o urgencias] distintas para cada nación?** ¿Tendrá que ver con la curva de aprendizaje o madurez nacional – en el marco legislativo y tributario de estas organizaciones – si es más conveniente para cierto momento del tiempo una atmósfera de colaboración, y para otros momentos resulte sana una atmósfera competitiva?

Es interesante examinar las curvas de aprendizaje generadas individualmente por múltiples proyectos y organizaciones, en términos de proveer al colectivo, a través de su experiencia individual, enseñanzas sobre las mejores prácticas en el diseño, implementación y evaluación de proyectos, así como las

posibles ausencias y dificultades institucionales en el sistema público para el navegar de estas organizaciones, en búsqueda de su desarrollo y sustento de largo plazo. Cabe preguntarse si estos aprendizajes comunes pueden ser un insumo relevante en el desarrollo de modelos y políticas de trabajo escalables en el tiempo y, formalizadas para potenciar a los diversos actores.

En suma, la identificación de trade-offs entre dinámicas de competencia y colaboración entre organizaciones que se dirigen hacia un mismo fin, puede permitir avanzar en una discusión para el surgimiento de modelos y estrategias que favorezcan una mejora estructural que apunte a mejores resultados globales de estas acciones.

Dada la ausencia de una estructura institucional legislativa y tributaria en Chile para el desarrollo de organizaciones medio ambientales sin fines de lucro, resulta necesario enfocarse en explorar cómo ha sido el aprendizaje de cada una de ellas, cómo ha sido la forma de sustento de largo plazo, cuáles han sido sus dificultades para poder obtener financiamiento, y cómo ven un avance legislativo y tributario a nivel país que vele por todos los intereses. **La búsqueda de cambios estructurales debiera tener una sincronía por parte de los actores, para evitar traslapar esfuerzos de un mismo sector, que pueden terminar sumando cero. Al final del día, las organizaciones medio ambientales representan al sector privado medio ambiental, por lo tanto los cambios a nivel país deben tener el consenso de dicho sector.** Sin consensos, la probabilidad de sumar cero es muy alta frente al intento de mejoras estructurales positivas para el país, pues las diferencias técnicas de un camino u otro terminan traslapándose, sin lograr avances.

Para ello, es importante analizar y aprender de modelos de países que han logrado cierto grado de madurez estructural en su institucionalidad, en cuanto al adecuado desarrollo y sustento de organizaciones medio ambientales sin fines de lucro.

En concreto, estos modelos nos invitan a indagar sobre cómo, a partir de ciertas iniciativas privadas y/o ciudadanas, la colaboración puede resultar en la formación de instrumentos, conformados por equipos de profesionales especializados y representantes gubernamentales y presupuestos designados. Para continuar la discusión, se propone explorar algunos modelos internacionales que pueden servir de referencia, partiendo por el caso de California.

Competition v/s Collaboration in the Environmental Sphere

The dynamics of competition and collaboration operate under different principles in for-profit and non-profit organizations. In non-profit organizations, there may be competition for obtaining funding, the pursuit of individual prestige, or simply because of the existence of obstacles to cooperation, due to low levels of trust. Collaboration, on the other hand, emerges - among other reasons - when there is a need to exchange knowledge and experiences to enhance resources that generate synergies for achieving common goals which cannot be achieved individually.

According to a preliminary study conducted by Fundación Punta de Lobos, there are currently some 150 private actors with existing projects in Chile, including NGOs, foundations, corporations and trade associations, only in the sphere of marine and coastal conservation. Although further information is required to determine the different areas that the different actors are involved in, as well as their operational dynamics, **there is a need to reflect on the possible effects that any eventual fragmentation and consequent duplication of efforts could have on achieving common, long-term countrywide objectives.**

On the one hand, one could argue that a multitude of actors with similar objectives, but working in different areas, gives rise to a dispersion of efforts and resources, producing overlaps and losing sight of the common underlying objectives of these organizations. Perhaps the above prevents progress towards achievements of greater long-term impact. However, from a different standpoint, it could be argued that competition creates a greater flow of philanthropic resources, that enable funding a larger number of actors and diverse requirements throughout the territory, among other benefits. In other words, we must ask ourselves the following: **Could it be, perhaps, that neither of these two spheres - competitive or collaborative - are negative, but rather that both are necessary at different times [or in different emergencies] in different countries?** In the legislative and tax framework of these organizations, does a country's learning curve or maturity have anything to do with whether an atmosphere of collaboration or competition is healthier or more convenient at any given time?

It is interesting to examine the individual learning curves of multiple projects and organizations, in terms of collectively providing, through their individual experiences, lessons regarding best practices in the design, implementation and assessment of projects, as well as the possible shortcomings and institutional stumbling blocks in the public system for the pursuit of long-term development and sustainability by these organizations. One wonders whether this common learning could be a relevant input in the development of scalable work models and policies over time, formalized for empowering the different actors.

In short, identifying trade-offs between inter-agency competition and collaboration dynamics directed towards the same goal could help in advancing towards a discussion on models and strategies that promote a structural improvement aimed at enhancing the overall results of these actions.

Given the absence of a tax and legislative institutional structure for the development of non-profit environmental organizations in Chile, one must necessarily focus on exploring the learning process of each one of them, their long-term survival methods, the difficulties they have encountered in obtaining financing, and how they view a countrywide legislative and tax initiative that caters to all interests. **The search for structural changes must be synchronized by the actors to avoid overlapping efforts in the same sector, which could end up in a zero-sum. Finally, environmental organizations represent the private environmental sector, so countrywide changes must have the consensus of that sector.** Without consensus, the likelihood of a zero-sum when attempting positive structural improvements for the country is very high because the technical differences of one or other path end up overlapping, without making any progress.

Hence, it is important to study and learn from models of countries that have achieved some degree of structural maturity in their institutions, in terms of the appropriate development and support of non-profit environmental organizations.

Specifically, these models lead us to inquire as to how collaboration in certain private and/or citizen initiatives can result in the creation of instruments comprising teams of professionals, representatives of government and designated budgets. To continue the discussion, we propose exploring some international models that could serve as a reference, starting with the case of California.



Agencias Regulatorias: El Caso de California

En Estados Unidos, las agencias regulatorias pueden asumir una variedad de formas y funciones, que van desde controlar y crear estándares y lineamientos para la industria, modificar comportamientos a través de incentivos basados en el mercado, hasta regular y modificar actividades a través de procesos de entrega de permisos. Estos últimos se refieren al proceso mediante el cual cualquier persona u empresa busca obtener la licencia necesaria para construir, implementar o desarrollar actividades reguladas por servicios de gobierno, incluyendo usos de tierra, procesos de zonificación, desarrollo y manejo ambiental (Hui, 2016).

Entre estas agencias, nos interesa destacar un caso particularmente exitoso: la California Coastal Commission (Comisión Costera de California).

La California Coastal Commission es una agencia regulatoria independiente cuasi-judicial, encargada de supervisar todo el uso de tierras y desarrollo en la zona costera del Estado de California. Su misión es la de "proteger, conservar, restaurar y mejorar los recursos ambientales y humanos en la costas y mares de California para un uso prudente y sustentable por las generaciones presentes y futuras".

Esta Comisión nace el año 1972 a través de una votación pública en todo el Estado de California de la llamada "Proposition 20", iniciativa gestada a partir de la necesidad de administrar el desarrollo costero de la Bahía de San Francisco. El año 1976 fue establecida de manera regular a través de la adopción del "Coastal Act", que establece los criterios de lo que se considera como "impactos ambientales adversos". Desde entonces, **la Comisión ha destacado por el rol fundamental que ha asumido en administrar los permisos para el desarrollo de diversos proyectos en el borde costero de California, a través de un organismo colegiado de funcionarios públicos y un staff de expertos, en coordinación con los gobiernos locales de las distintas ciudades y condados de California.**

La California Coastal Commission tiene 12 miembros con derecho a voto y 3 miembros sin derecho. Seis de ellos vienen del mundo público, designados por el Gobernador o Senador de la Región, y los otros 6 vienen del mundo privado, elegidos mediante una votación entre líderes de organizaciones relacionadas a los recursos naturales trabajando en la Región. Los otros tres sin derecho a voto, vienen del la Agencia de Recursos Naturales, de la Agencia de Transporte y de la Agencia de Tierras Públicas de California.

De acuerdo a un estudio realizado en 2016 por Iris Hui – científica política de la Universidad de Stanford – los principales criterios que ha utilizado la Comisión para la evaluación de los proyectos presentados, han sido los de minimizar los impactos visuales y escénicos (Sección 30251 del Coastal Act), minimizar

los impactos en hábitats sensibles (Sección 30240) y minimizar impactos que afecten el acceso público a la costa (Sección 30211). Estos criterios se han aplicado a la gran mayoría de las solicitudes realizadas, que están constituidas principalmente por obras de construcción, obras públicas y desarrollo comercial. Entre los otros criterios preponderantes en los procesos de evaluación, se encuentran: garantizar los usos recreativos en los espacios costeros y marinos, proteger los recursos marinos y minimizar impactos por descargas de desechos.

A lo largo de más de 40 años, la Comisión se ha posicionado como una entidad de alta importancia para la regulación de proyectos a lo largo de la costa de California. Los múltiples litigios judiciales y conflictos que ha suscitado en su historia han generado posturas adversas. Pero también **ha sido objeto de grandes reconocimientos por haber liderado lo que Hui llama un "desarrollo controlado" ("managed development") del borde costero, es decir, que ha permitido el desarrollo, pero administrando scrupulosamente varios aspectos del mismo.** En efecto, Hui demuestra que la tasa de aprobación de permisos, aunque varía de acuerdo al tipo de solicitud es, en promedio, de un 80%. Sin embargo, la gran mayoría de los permisos son aprobados "con condiciones", lo que implica un proceso de negociación de la Comisión con los interesados para modificar aspectos de los proyectos con el fin de adecuarlos a los criterios antes mencionados.

De acuerdo a un estudio realizado en 2016 por Iris Hui – científica política de la Universidad de Stanford – los principales criterios que ha utilizado la Comisión para la evaluación de los proyectos presentados, han sido los de minimizar los impactos visuales y escénicos (Sección 30251 del Coastal Act), minimizar

Regulatory Agencies: The Case of California

In the United States, regulatory agencies can assume a variety of forms and functions, ranging from controlling and creating standards and guidelines for the industry, changing behavior through market-based incentives, and even regulating and modifying activities through permit-granting processes. The latter refer to the process whereby any individual or company seeks to obtain the license required to build, implement or carry out activities regulated by government services, including land use, zoning processes, development and environmental management (Hui, 2016).

Among these agencies, we wish to highlight a particularly successful case: the California Coastal Commission.

The California Coastal Commission is a quasi-judicial independent regulatory agency, charged with overseeing all land use and development in the coastal area of the State of California. Its mission is to "protect, preserve, restore and improve the environmental and human resources on the coastlines and seas of California for prudent and sustainable use by present and future generations."

This Commission was created in 1972 through a public vote in the entire state of California on so-called "Proposition 20," an initiative arising from the need to manage the coastal development of the San Francisco Bay area. It was introduced in 1976 through the "Coastal Act," which lays down the criteria for what are considered to be "adverse environmental impacts." Since then, **the Commission has been known for its fundamental role in managing permits for the development of different projects on the California coastline, through a collegiate body of civil servants and a staff of experts, in coordination with the local governments of different cities and counties in California.**

The California Coastal Commission comprises 12 members with the right to vote, and 3 members without such right. Six of them come from the public sphere, appointed by the Regional Governor or Senator, and the other 6 come from the private sector, elected in a ballot among leaders of organizations involved in natural resources working in the Region. The other three members without the right to vote come from the Natural Resources, Transportation or Public Lands agencies of California. According to a study conducted in 2016 by Iris Hui - a political scientist at Stanford University - the main criteria the Commission has used for assessing the projects submitted, have been the minimization of visual and scenic impacts (Section 30251 of the Coastal Act), the minimization of impacts on sensitive habitats (Section 30240) and the minimization of impacts that affect public access to the coast (Section 30211). These criteria have been applied to the vast majority of the applications submitted, mainly comprising construction works, public works and commercial development. The other prevailing criteria

in assessment processes include: ensuring recreational uses in coastal and marine areas, protecting marine resources and minimizing impacts due to waste discharges.

Over more than 40 years, the Commission has become an extremely important agency for the regulation of projects along the entire California coastline. The multiple lawsuits and contention it has given rise to throughout its history, have generated conflicting points of view. **But it has also been widely recognized for leading what Hui calls the "managed development" of the coastline, i.e. that has enabled development while scrupulously managing certain aspects thereof.** In fact, Hui shows that the permit approval rate is, on average, 80%, although it varies according to the type of application. Nonetheless, the vast majority of permits are approved "subject to conditions," which implies a negotiating process between the Commission and stakeholders to modify aspects of the project in order to adapt them to the aforementioned criteria.



4.

Desafíos a la Institucionalidad Chilena

A partir de una breve mirada a la institucionalidad y las políticas públicas nacionales, es posible afirmar que Chile aún está lejos de lograr un manejo efectivo e integrado de su borde costero y espacios marinos. En efecto, el nivel de fragmentación y atomización en la administración de estos espacios se ve reflejada en la dispersión de funciones de regulación, otorgamiento de concesiones y fiscalización entre varios servicios y organismos de distinta índole, entre los que se incluyen el Comité Nacional y los Comités Regionales de Uso del Borde Costero, creados por la Política Nacional de Uso del Borde Costero; el Ministerio de Defensa; la Dirección General de Territorio Marítimo y Marina Mercante; el Ministerio de Economía, a través de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura y el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura y; el Ministerio del Medio Ambiente, a través del Servicio de Evaluación Ambiental y la Superintendencia del Medio Ambiente.

También es necesario identificar el rol de otros ministerios con competencia en la administración de aspectos específicos del borde costero, como los Ministerios de Bienes Nacionales, de Vivienda y Urbanismo, y de Obras Públicas. **Adicionalmente, observamos que existen diversos instrumentos de planificación territorial como son los planes reguladores comunales e intercomunales, que muchas veces se superponen y/o contradicen y/o están desactualizados con los organismos que dictan las zonificaciones y el otorgamiento de concesiones a nivel nacional o regional** (Urrutia & Weber, 2016).

En vista de lo anterior, podemos afirmar que la inexistencia de una política integrada de regulación de uso del borde costero y espacios marinos, sitúa a Chile en un escenario de desarrollo costero marino irregular que posee escasa o nula planificación. De este modo, se vuelve fundamental entender qué pasos son necesarios para acortar brechas en el avance hacia la conformación de entidades regulatorias más efectivas.

A esta altura, creemos conveniente revisar brevemente el concepto de Manejo Integrado del Borde Costero (*Integrated Coastal Management*). Si bien existe amplia literatura que se refiere a este concepto, nos guaremos por Vugteveen et. al

(2015), quien la define, según lineamientos establecidos por la European Commission (2002), como “la administración de todos los procesos de políticas públicas que afecten al borde costero, incluyendo las interacciones entre ecosistemas marinos y costeros, de modo coordinado con el fin de asegurar el desarrollo sustentable de las áreas costeras y marinas”. Vugteveen afirma también que un **Manejo Integrado del Borde Costero busca “asegurar que las decisiones de manejo y/o planificación sean abordadas de manera coherente entre los campos ecológicos y socioeconómicos, garantizando el uso sustentable de los recursos costeros y marinos**. Algunos aspectos fundamentales son la exhaustividad en el uso de criterios con un foco lo suficientemente amplio, para abordar los problemas en toda su complejidad, y que favorezcan la cooperación entre los distintos actores de interés”.

Challenges Facing the Chilean Institutional Framework

From a brief look at the national institutional framework and public policies, one could say that Chile is still far from achieving effective and comprehensive management of its coastline and marine areas. In effect, the degree of fragmentation and atomization in the administration of these areas is reflected in the dispersion of regulatory powers, granting of concessions and oversight assigned to different types of services and agencies, including the National Committee and the Regional Committees for the Use of the Coastline, created by the National Policy for the Use of the Coastline; the Ministry of Defense; the Directorate of the Maritime Territory and the Merchant Marine; the Ministry of Economy, through the Office of the Undersecretary of Fisheries and Aquaculture and the National Fisheries and Aquaculture Service; the Ministry of the Environment, through the Environmental Assessment Service and the Environmental Commission.

It is also necessary to identify the role of other Ministries responsible for the administration of specific aspects of the coastline, such as the Ministries of National Assets, Housing and Urban Development, and Public Works. **We have also observed that there are different territorial planning instruments, such as municipal and inter-municipality regulatory plans, which often overlap and / or contradict one another and/ or are out of sync with the zoning and concession-granting agencies at a national or regional level** (Urrutia & Weber, 2016).

In view of the above, we can say that the lack of a comprehensive policy for regulating the use of the coastline and marine areas, places Chile in a scenario of irregular coastline development, with little or no planning. Thus, it is essential to understand the steps necessary for reducing the gaps in progressing towards the establishment of more effective regulatory agencies.

At this point, we believe it would be convenient to briefly review the concept of Integrated Coastal Management. Although there is extensive literature referring to this concept, we will be guided by Vugteveen et. al (2015), who define it, based on European Commission guidelines (2002), as "the administration of all public policy processes affecting the coastline, including the coordination of interactions between marine and coastal ecosystems, to ensure the sustainable development of coastal and marine areas." Vugteveen also says that **Integrated Coastal Management of the coastline seeks to "ensure that the management and/or planning decisions are addressed consistently between the ecological and socioeconomic spheres, ensuring the sustainable use of coastal and marine resources.** Some fundamental aspects are the comprehensive use of sufficiently broad criteria for addressing problems in all their complexity, that favor cooperation between the different stakeholders."



El Rol de la Filantropía

Es importante referirse brevemente al rol que la filantropía ha ejercido en avanzar hacia la sustentabilidad en el desarrollo costero y marino en Chile y, al potencial que tienen los actores para fomentar las alianzas y colaboraciones que puedan permitir avances hacia el surgimiento de modelos de cooperación, como los que hemos mencionado.

Según estudios realizados el 2017 por el Centro de Filantropía de la Universidad Adolfo Ibáñez (en adelante "UAI"), en Chile, el monto de donaciones totales se ubica en torno a los 83 millones de dólares, que representa un 0,03% del PIB de Chile (esta cifra no considera las donaciones internacionales). En EEUU esta cifra se ubica en torno a los 52 mil millones de dólares para el año 2014, alcanzando el 0,35% del PIB de ese país. Otros indicadores importantes son el creciente número de donantes en Chile, con un crecimiento de 8,4 veces en la última década, considerando a empresarios, fundaciones filantrópicas, inversionistas de impacto¹, empresas y ciudadanos y; los montos de las donaciones, con una tasa de crecimiento anual del 10% desde el año 2005. Sin embargo, según este mismo estudio, las donaciones en Chile destinadas a la conservación del medioambiente, son sólo de unos 136 mil dólares de inversión promedio en el año 2015 (13%); ocupando, junto con arte, cultura y patrimonio, el tercer lugar en un ranking de beneficiarios de donaciones, después de educación (37%) y, bienestar y desarrollo social (15%). Es importante mencionar nuevamente, que las cifras anteriores no consideran las inversiones extranjeras realizadas en Chile.

Siguiendo la línea de aprender de modelos exitosos, sin duda hay mucho que analizar sobre filantropía desde California, especialmente en temas medioambientales y de la protección de sus recursos naturales.

Desde California, a fines de los 90' comenzaron a ingresar a Chile recursos financieros en grandes cantidades, provenientes de Fundaciones Filantrópicas que ven en nuestro país la posibilidad de enmendar errores cometidos en las vías de ser un país desarrollado. La preocupación de estos donantes, radica en que Chile contiene recursos naturales que no existen en otros lugares del planeta, los cuales son únicos y no compensables; los que aún tienen la posibilidad de ser salvaguardados si se planifica a tiempo y se ponderan con real importancia en el camino hacia el desarrollo.

Han ingresado recursos filantrópicos desde California para la realización de estudios científicos sobre nuestros océanos, ríos, bosques nativos y especies de nuestra biodiversidad

natural. Así también, para el desarrollo de campañas para la protección de elementos de la biodiversidad de Chile que se ven amenazados y para avanzar en infraestructura estatal; que permita una mejora de las políticas públicas frente a temas medioambientales, donaciones, legislación y sistematización de servicios eco-sistémicos. Adicionalmente para la realización de grandes proyectos de conservación marina y terrestre. **De no haber tenido dichos aportes financieros desde el extranjero durante todo este tiempo, el mundo medio ambiental en Chile no hubiese proliferado como lo ha hecho hasta ahora, jugando un rol que cada vez toma más relevancia en Chile.** Todo lo anterior ha tenido lugar en ausencia de una adecuada institucionalidad y estructura país para tales fines, como fue mencionado anteriormente.

Según el mismo estudio del Centro de Filantropía de la UAI, los principales desafíos para el desarrollo de un "ecosistema de la filantropía" son la articulación de un sistema legal de donaciones que facilite la movilización de aportes privados al bienestar social; el fortalecimiento de las organizaciones beneficiarias en términos de gestión y transparencia; y el fortalecimiento de la confianza social, factor clave que afecta no sólo al ecosistema filantrópico, sino que a todo proyecto que busca desarrollarse en base a la colaboración.

Bajo este diagnóstico, y con una visión positiva hacia el desarrollo de la filantropía por su rol en el levantamiento de recursos, construcción de redes y fortalecimiento de la sociedad civil (Aninat, 2017), es importante subrayar la importancia de los donantes. **Que un determinado empresario se involucre en filantropía genera sinergias impensadas para el país. Para comenzar, aumenta el nivel de confianzas entre el mundo empresarial y las personas. Por otro lado, la filantropía llena un vacío hacia las personas, su bienestar y el medioambiente, que el Estado no es capaz de cumplir por diversos motivos. Las acciones filantrópicas funcionan como complemento a las del Estado, por lo tanto jamás deben ser vistas como una amenaza.** Sin embargo, nos damos cuenta que dados los bajos niveles de confianza que vive el país, las acciones filantrópicas no funcionan engranadas con el Estado, generando el recelo y la polarización desde ambas partes.

The Role of Philanthropy

It is important to briefly refer to the role of philanthropy in advancing sustainability in coastline development in Chile, and the potential of stakeholders for encouraging partnerships and collaboration that could lead to progress towards the emergence of cooperation models, like the ones we have mentioned.

According to studies carried out in 2017 by the Philanthropy Center of Adolfo Ibáñez University (hereinafter "UAI"), the total amount of donations in Chile stands at approximately 83 million dollars, representing 0.03% of GDP (this figure does not include international donations). In the United States, this figure was approximately 52 billion dollars in 2014, 0.35% of the country's GDP. Other important indicators are the growing number of donors in Chile, which have multiplied 8.4 times in the past decade, including entrepreneurs, philanthropic foundations, impact investors¹, corporations and citizens, and the amounts of the donations, with an annual growth rate of 10% since 2005. However, according to this same study, donations to the conservation of the environment in Chile were only about 136 thousand dollars of the average investment in 2015 (13%); occupying third place with art, culture and heritage, in a ranking of beneficiaries of donations, after education (37%) and welfare and social development (15%). It is important to mention again that these figures do not include foreign investment in Chile.

Following on the idea of learning from successful models, there is undoubtedly much to analyze regarding philanthropy from California, especially with regard to environmental issues and the protection of its natural resources.

Financial resources began entering Chile from California in large quantities at the end of the 1990s, from Philanthropic Foundations that see in our country the possibility of correcting errors committed in the process of becoming a developed country. The concern of these donors lies in the fact that Chile contains unique and irreplaceable natural resources that do not exist in other parts of the planet, which can still be safeguarded with timely planning and gauging their true significance on the road to development.

Philanthropic resources have entered the country from California for conducting scientific studies of our oceans, rivers, forests and the species of our natural biodiversity, as well as conducting campaigns for the protection of elements of Chilean biodiversity that are threatened, and for advancing in the creation of a State infrastructure that would enable improving public policies related to the environment, donations, legislation and systematization of eco-systemic services. Also, for the execution of large marine and land conservation projects. **Had it not been for such financial**

contributions during all this time, environmental activity in Chile would not have proliferated as it has done so far, playing an increasingly more relevant role in Chile. All the above has occurred in the absence of an adequate institutional framework and countrywide structure for such purposes, as previously mentioned.

According to the same study by the Center for Philanthropy of the UAI, the main challenges for the development of a "philanthropy ecosystem" are the articulation of a legal donation system that facilitates the mobilization of private contributions to social welfare; the strengthening of management and transparency of beneficiary organizations; and the strengthening of social trust, a key factor that affects not only the philanthropic ecosystem, but also any project that pursues development based on collaboration.

According to this analysis, and with a positive view regarding the development of philanthropy due to its role in raising funds, the construction of networks and the strengthening of civil society (Aninat, 2017), it is important to highlight the importance of **The fact that any given entrepreneur gets involved in philanthropy generates unexpected synergies for the country. To begin with, it increases the level of trust between the corporate environment and individuals. On the other hand, philanthropy fills a void relating to people, well-being and the environment, which the State is not able to fulfill for several reasons. Philanthropic activities are complementary to those of the State, so they should never be seen as a threat.** Nonetheless, we have noticed that given the low levels of trust that the country is experiencing, philanthropic actions do not work in tandem with the State, giving rise to mistrust and polarization from both sides.

¹ Inversiones de impacto: "aquellos instrumentos de inversión donde convergen valores y modelos de negocios, logrando aunar los objetivos sociales y medioambientales con la rentabilidad financiera del capital (Rodin y Brandenburg, 2014).

¹ Impact investments: "those investment vehicles in which values and business models converge, combining social and environmental goals with financial returns on capital (Rodin and Brandenburg, 2014).



Discusión

Nos hemos referido brevemente a cómo la colaboración puede favorecer el surgimiento de consensos entre los distintos actores para potenciar modelos colaborativos de desarrollo, comenzando por la generación de instancias de diálogo, y el establecimiento de canales eficaces de comunicación e intercambio de aprendizajes. Hoy, quizás más que nunca, la sincronización de esfuerzos es urgente para enfrentar aquellos desafíos que ningún actor por sí solo podría resolver, frente a un planeta que cuestiona urgentemente la forma de hacer las cosas frente a los cambios climáticos y al mal diagnóstico de no producirse cambios, ahora.

Aún reconociendo la existencia actual de iniciativas privadas y público-privadas para la colaboración, el diagnóstico apunta hacia un escenario altamente fragmentado, donde acciones que se dirigen hacia un mismo objetivo son realizadas de manera paralela y solapada, por una multitud de actores que, idealmente, deberían **operar bajo una lógica de colaboración con el fin de generar mayores impactos y cambios estructurales de beneficio colectivo**.

Si bien es necesario atender al contexto y a la realidad institucional propia de Chile, además de seguir explorando modelos que permitan extraer buenas prácticas, **el caso de California sirve como un ejemplo para demostrar que sí es posible el desarrollo de entidades de origen ciudadano, con capacidades regulatorias**. Esto nos invita a iniciar un diálogo que permita establecer consensos sobre los mejores instrumentos para una regulación reconocida por todos los actores, para un manejo integrado de nuestros ecosistemas, sus servicios costeros y marinos.

Para el desarrollo de este diálogo que busca consensos, se ha comprobado que deben establecerse ciertos pilares para la toma de decisiones complejas. Entre ellos, basar el diálogo y los procesos en fuentes científicas sólidas del tema en cuestión, procurando el uso de un lenguaje accesible a todas las partes interesadas; el fomento de la empatía entre las partes como fuente de confianza y transparencia en el diálogo; y el entendimiento de los impactos en una determinada situación. Todos los anteriores, son pilares fundamentales para la búsqueda de consensos y la visualización de los problemas de forma local y globalmente, con todas sus complejidades.

Bajo estas y otras condiciones a dialogar, se podrá ir evaluando como pueden terminar en resultados estructurales claves, que aporten al acompañamiento en el camino al desarrollo de Chile, con una colaboración real entre el sistema público y privado.

Discussion

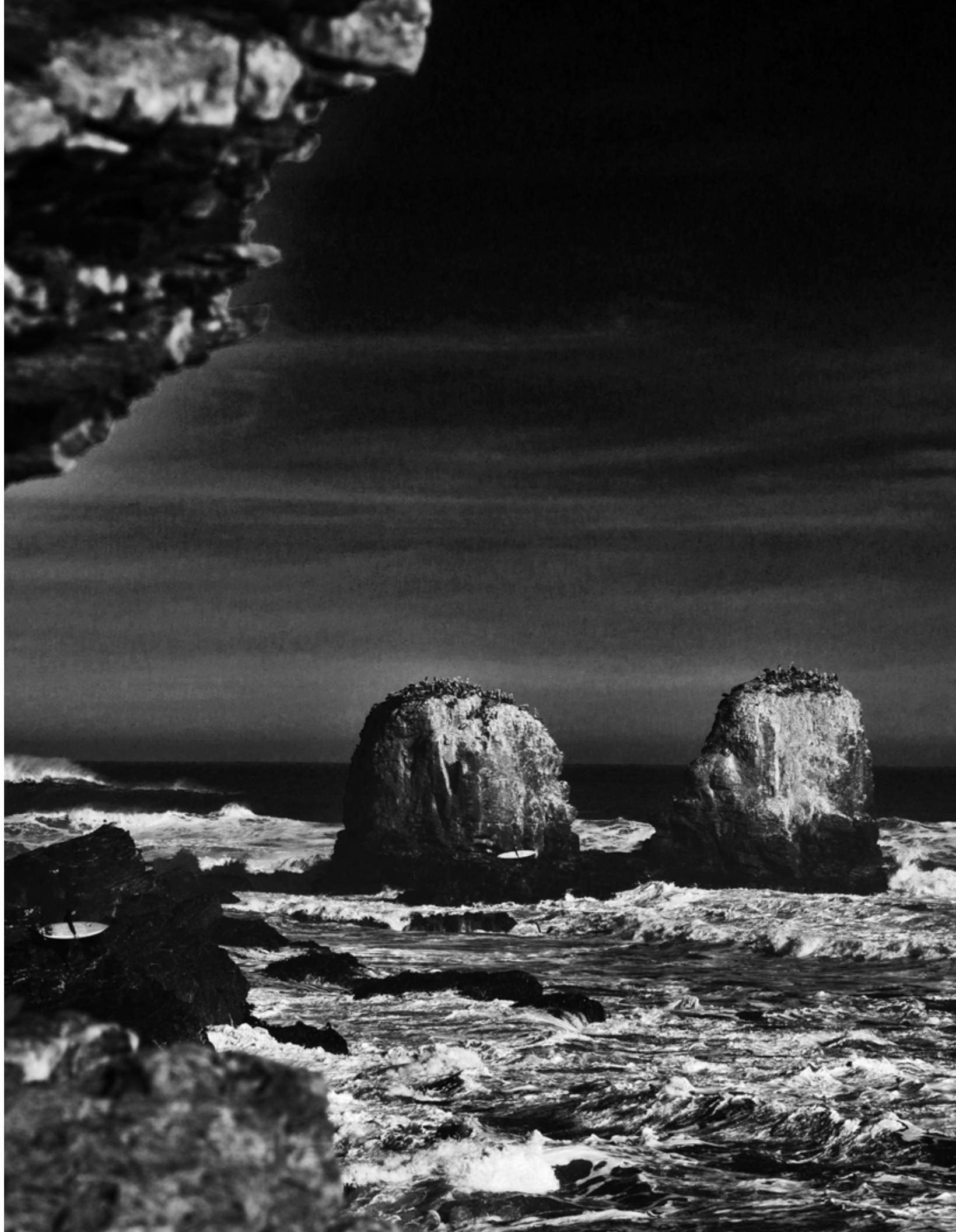
We have briefly referred to how collaboration can favor the emergence of consensus among the different stakeholders to promote collaborative models of development, beginning with the creation of opportunities for dialog, and the establishment of effective channels of communication and exchange of learning experiences.

Even though it acknowledges the existence of private and public-private initiatives for collaboration, the diagnosis reveals a highly fragmented scenario, where actions for achieving the same objective are carried out in a parallel and overlapping manner, by a multitude of actors, who should ideally **operate subject to a logic of collaboration in order to generate greater impacts and structural changes for the benefit of all**.

While one must understand the context and the institutional reality of Chile and continue to explore models that enable extracting best practices, **the case of California serves as an example to demonstrate that the development of institutions with regulatory capacity**, originating among citizens, is possible. This drives us to begin a dialog that will build consensus on the best tools for regulation recognized by all stakeholders, for integrated management of our ecosystems and their coastal and marine services.

Experience has shown that certain pillars for making complex decisions must be put in place for the development of this consensus-seeking dialogue. These include building the dialog and processes on solid scientific sources on the subject matter, using a language that is accessible to all stakeholders; the promotion of empathy as a source of trust and transparency in the dialog between the parties, and an understanding of the impacts in a given situation. All of the above are cornerstones for the search for consensus and the local and global visualization of problems, with all their complexities.

Under these and other conditions to be discussed, we can assess how they may end up in key structural results that contribute to the development of Chile, with true collaboration between the public and private systems.



Referencias

- Aninat, M. (2017). Filantropía Institucional en Chile. Serie Mapeo de Filantropía e Inversiones Sociales. Santiago de Chile: CEFIS UAI.
- Aninat, M & Fuenzalida, I. (2017). Visión y prácticas de los donantes en Chile. Santiago de Chile: CEFIS UAI, BID y Fundación Lealtad.
- Hui, I. (2016). Shaping the Coast with Permits: Making the State Regulatory Permitting Process Transparent with Text Mining. Bill Lane Center for the American West Stanford University
- Ministerio del Medio Ambiente, GEF-PNUD (2016). Diagnóstico y Caracterización de las Iniciativas de Conservación Privada en Chile. Documento de trabajo. Santiago de Chile.
- Urrutia, O. & Weber, P. (2016). Bases administrativas para un futuro Ministerio del Mar y Borde Costero en Chile. En: Ferrada, J., Bermúdez, J., & Urrutia, O. (Editores). Doctrina y enseñanza del Derecho Administrativo chileno: estudios en homenaje a Pedro Pierry Arrau. Valparaíso, Ediciones Universitarias de Valparaíso, pp. 95-148.
- Vugteveen, P., M. M. van Katwijk, E. Rouwette, H. Lenders, and L. Hanssen (2015). Developing an effective adaptive monitoring network to support integrated coastal management in a multiuser nature reserve. Ecology and Society 20(1): 59.

References

- Aninat, M. (2017). Filantropía Institucional en Chile (Institutional philanthropy in Chile). Serie Mapeo de Filantropía e Inversiones Sociales (Series of Maps of Philanthropy and Social Investments) Santiago, Chile: CEFIS UAI.
- Aninat, M & Fuenzalida, I (2017). Visión y prácticas de los donantes en Chile (Vision and practices of donors in Chile). Santiago, Chile: CEFIS UAI, IDB and Fundación Lealtad.
- Hui, I. (2016). Shaping the Coast with Permits: Making the State Regulatory Permitting Process Transparent with Text Mining. Bill Lane Center for the American West Stanford University
- Ministry of the Environment, GEF-UNDP (2016). Diagnóstico y Caracterización de las Iniciativas de Conservación Privada en Chile (Diagnosis and Characterization of Private Conservation initiatives in Chile). Discussion paper. Santiago, Chile.
- Urrutia, O. & Weber, P. (2016). Bases administrativas para un futuro Ministerio del Mar y Borde Costero en Chile (Administrative terms and conditions for the future Ministry of the Sea and Coastline in Chile). In: Ferrada, J., Bermúdez, J., and Urrutia, O. (Editors), Doctrina y enseñanza del Derecho Administrativo chileno: estudios en homenaje a Pedro Pierry Arrau (Doctrine and teaching of Chilean Administrative Law: studies in tribute to Pedro Pierry Arrau). Valparaíso, Ediciones Universitarias de Valparaíso, pp. 95-148.
- Vugteveen, P., M. M. van Katwijk, E. Rouwette, H. Lenders, and L. Hanssen (2015). Developing an effective adaptive monitoring network to support integrated coastal management in a multiuser nature reserve. Ecology and Society 20(1): 59.

Hacia la Filantropía Ambiental Towards Environmental Philanthropy



Panorama Actual de las OSC en Chile

Overview of CSOs in Chile

A continuación se presenta un breve documento que pretende ser una aproximación a la filantropía ambiental en Chile, de manera que impulse tanto a la búsqueda de un mayor conocimiento, como a lograr un diagnóstico apropiado del funcionamiento del sector que destina sus esfuerzos al cuidado del medio ambiente que contribuya efectivamente a su progreso. Los datos provienen de estudios de distintas fuentes, responden a metodologías diversas, y han sido realizados sobre universos y datos también disímiles, es por ello que su valor es sólo indicario. Pese a lo anterior, creemos que son suficientes para facilitar una primera mirada y favorecen a ampliar la discusión.

This brief document aims to serve as an approximation to environmental philanthropy in Chile, encouraging the search for greater knowledge and a suitable diagnosis of the environmental protection sector, effectively contributing to its progress. The data originates in studies by different sources, using different methodologies, carried out on dissimilar universes with dissimilar information; hence its value is merely circumstantial. Nonetheless, we believe it is sufficient for an initial review, and contributes to opening up the discussion.

En Chile actualmente existen 234.502 organizaciones de la sociedad civil (OSC). Representan una parte importante de la actividad económica del país, específicamente el 2,1% del PIB de Chile. Las OSC chilenas generan poco más de 145 mil empleos remunerados que corresponden a 1,7% de la fuerza laboral.

De las 234.502 organizaciones casi el 48% de estas fueron creadas el 2006 y el 26,5% de ellas se iniciaron entre 2011 y 2015, lo que es congruente con la aparición de la Ley 20.500 sobre participación ciudadana que simplificó los procesos de obtención de personalidad jurídica.

Cerca del 80% de las OSC son organizaciones comunitarias y funcionales, juntas de vecinos o uniones comunales. **Del 20% restante de las organizaciones, se aprecia que solamente los sindicatos, así como las fundaciones y asociaciones no acogidas a leyes especiales, representan más de un 6% del total (las OSC con foco en la protección del medio ambiente estarían dentro de este porcentaje).**

Las actividades principales que desarrollan las OSC se enmarcan en el ámbito del desarrollo social, vivienda, cultura y recreación. Seguido por educación e investigación y la de asociaciones gremiales, asociaciones de profesionales y sindicatos. **Las organizaciones con menos presencia en Chile corresponden a las organizaciones internacionales, medio ambiente (0,9%) y a las de intermediarios filantrópicos y promotores de voluntariado.**

El sector que realiza actividades filantrópicas comprende actores variados: empresarios, organizaciones filantrópicas, inversionistas de impacto, empresas y ciudadanos. Para incentivar estas actividades **es necesario comprender las variables que guían el comportamiento de estos actores, tales como sus fuentes de recursos, las actividades específicas que realizan, así como también las dificultades que enfrentan.** Existe insuficiente información respecto del sector "filantrópico" en general, y la ausencia de conocimiento es aún mayor en lo que se refiere específicamente al sector con foco en el cuidado del medio ambiente.

There are currently 234,502 Civil Society Organizations (CSO) in Chile. They are an important part of the country's economic activity, accounting for 2.1% of its GDP. The Chilean CSOs generate slightly more than 145,000 paid jobs, corresponding to 1.7% of the labor force.

Almost 48% of these 234,502 organizations were created in 2006 and 26.5% of them started up between 2011 and 2015, which coincides with the promulgation of Law 20.500 on citizen participation, which simplified the process for obtaining legal status.

About 80% of CSOs are community and functional organizations, neighborhood committees or municipal councils. **Trade unions, foundations and associations not governed by special laws make up more than 6% of the remaining 20% (the CSOs involved in environmental protection fall within this 6%).**

The CSOs are mostly involved in social development, housing, culture and recreation, and to a lesser extent in education and research, trade and professional associations and trade unions. **The organizations least present in Chile are international agencies, environmental agencies (0.9%), philanthropic intermediaries and volunteering services.**

The sector engaged in philanthropic activities comprises a variety of entrepreneurs, philanthropic organizations, impact investors, corporations and private citizens. In order to encourage these activities, **one must understand the variables that drive the behavior of these actors, such as their sources of funding, their specific activities and the difficulties they face.** There is insufficient information regarding the "philanthropic" sector in general, and the **lack of knowledge regarding the sector specifically focusing on environmental protection is even greater.**

Financiamiento de las OSC y Filantropía

En cuanto a los recursos para su funcionamiento, específicamente en lo que se refiere a las donaciones, en Chile han tenido un crecimiento sostenido en la última década. Los datos de las donaciones que se registran ante el Servicio de Impuestos Internos, el Ministerio de Educación y el Banco Central, señalan que han tenido en promedio una tasa de crecimiento real anual de 10% desde el año 2005, alcanzando en 2015 el 0,1% del PIB (equivalente a 222 millones de dólares). Es interesante señalar que este crecimiento en el monto de las donaciones ha ido de la mano de un aumento en el número de donantes, que ha aumentado 8,4 veces en la década señalada, sin embargo son las empresas las responsables de aportar el 84% de los recursos.

El fomento de la filantropía no debe restringirse a la voluntad de donar, sino que requiere realizarse de modo integral buscando la promoción de conductas socio-culturales que contribuyan a la creación de valor social, integrando a la sociedad en su conjunto, y muy especialmente a la sociedad civil organizada que, en materia ambiental, ha tenido una incidencia notoria en distintos ámbitos del quehacer ambiental, tales como la contribución significativa a que Chile cumpla con sus acuerdos internacionales en materia de protección del medio ambiente, mejorando la calidad de vida de quienes viven en territorios con daños ambientales, promoviendo prácticas sostenibles, inclusión social, educación ambiental, justicia ambiental, el desarrollo de políticas públicas, políticas para enfrentar el cambio climático, investigación científica, innovación, inversiones de impacto, energías renovables, conservación de la naturaleza y otros.

El adelanto en cada una de estas materias ha requerido, y sigue exigiendo, de estas organizaciones trabajos que no están exentos de conflictividad con el sector productivo y político por la resistencia a la implementación de mejoras en materias tales como la reducción del uso de agro-tóxicos, el combate de incendios, ordenamiento territorial, reforma al código de aguas, participación ambiental, des-carbonización de la matriz energética, abandono de la mega-hidroelectricidad, regulación y elevación de estándares de la industria acuícola, control del maltrato animal en las industrias de la carne, uso de antibióticos, regulación de pasivos ambientales (especialmente mineros), descontaminación de zonas saturadas, etc. **Todas actividades de indudable contribución al bien común.**

Con el fin de ahondar en el conocimiento respecto de las motivaciones para la filantropía ambiental conocer la composición, en términos del tipo de organización (familiar, empresarial, o independiente), de las organizaciones que se dedican a estas materias contribuye a reconocer, en alguna medida, las causas que las inducen, el ámbito de actividades que desarrollan y la fuente de sus recursos. La temática ambiental es foco prioritario principalmente para las fundaciones

independientes (25%), en menor medida para las familiares (11%) y en términos bastante inferiores para las empresariales (un 5%). ¿Qué es lo que incita, entonces, a éstas organizaciones a la filantropía?

Si bien no hay un análisis específico respecto de las motivaciones filantrópicas en materia ambiental, si hay conocimiento a nivel general: "Entre los donantes individuales, las principales motivaciones para realizar aportes sociales tienen relación con la empatía y con la autoconciencia de las oportunidades y condiciones económicas a las cuales han tenido acceso. También influyen otros elementos del entorno, como la tradición familiar y el imperativo moral de devolver a la sociedad, el comportamiento colectivo de sus pares y una actitud reactiva movilizadora ante las emergencias."¹

En el caso de las empresas, a diferencia de los anteriores, la actividad filantrópica se encuentra vinculada al concepto de responsabilidad social empresarial (RS) en sus 3 dimensiones, ambiental, social y de gobernanza. Su conducta filantrópica está fuertemente vinculada a la necesidad de legitimidad, reputación y a la posibilidad de negociación con stakeholders relacionados a la operación del negocio. La RS se enmarca en el quehacer de la empresa, su objetivo es obtener beneficios para la misma. Los recursos de las fundaciones empresariales rara vez provienen de un endowment, un 38% de dichas organizaciones depende exclusivamente de la empresa, mientras el 61% cuenta además con otras fuentes como fondos públicos o ventas de la propia fundación (10%). Llama la atención que el foco principal de estas organizaciones está en la educación (32%) y, en el bienestar y desarrollo social (36%).

Dentro del grupo empresarial se comprenden las obras y actividades que se encuentran afectas a las normas que rigen al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental que obligan a reparar, mitigar y compensar sus efectos adversos, teniendo en cuenta que estas medidas reparatorias son llevadas a cabo, en buena medida, por Fundaciones Empresariales que están ligadas a un proyecto de inversión específico. Ello exige comprender cuál es la gravitación de éstas Fundaciones en el sector de la filantropía ambiental institucional como un subsector, determinando cuánto gastan efectivamente estas empresas en el cuidado del medio ambiente y cuál es la efectividad de su gestión en términos técnico-científicos, así como también el origen de los recursos de las referidas organizaciones.

Se debe tener presente que, en la actualidad, el gasto que realizan las empresas teniendo como causa el cumplimiento de sus obligaciones legales ambientales se considera aceptado, no está afecto a impuestos, sin embargo no reciben créditos

o rebajas tributarias en el cumplimiento de sus compromisos ambientales obligatorios.

La actividad de las Fundaciones puramente Filantrópicas aparece motivada principalmente por altruismo y en segundo plano por motivos estratégicos, considerando a personas o ámbitos que han sido desatendidos o rezagados del progreso social; buscan generar valor agregado a la sociedad a partir de sus propias capacidades, su estrategia es de "bottom up", incidiendo en políticas públicas para el bienestar del país.

No hay, hasta ahora, un análisis de la motivación de Fundaciones independientes (no empresariales, ni familiares) que tengan su foco de acción en el medio ambiente, así como tampoco del origen de sus recursos, sin embargo son precisamente éstas las que, hasta ahora, presentan mayor foco de trabajo en la protección del medio ambiente, es decir que son las de mayor gravitación en el sector. Si bien es posible deducir que su motivación principal es de carácter estratégico, es indispensable estudiar su comportamiento para fortalecer su actividad y promover los incentivos adecuados.

¹ Universidad Adolfo Ibáñez, "Visión y Práctica de los Donantes en Chile" (2017). Pág. 14.

Financing of the CSOs and Philanthropy

Funding of the CSO's in Chile has grown steadily in the last decade, especially with regard to donations. The information regarding donations recorded with the Internal Revenue Service, the Ministry of Education and the Central Bank, shows that their average real annual growth rate since 2005 has been 10%, amounting to 0.1% of GDP in 2015 (equivalent to US\$ 222 million). It is interesting to note that this increase in the amount of donations has gone hand in hand with an increase in the number of donors, which has increased 8.4 times in the aforementioned decade. However, **84% of funding is provided by corporations.**

The promotion of philanthropy should not be restricted merely to the will to donate, but should be carried out comprehensively, seeking the promotion of socio-cultural behavior that contributes to the creation of social value, integrating society as a whole, and especially **organized civil society**, which in environmental matters has had a notorious impact in different areas of environmental work, such as the significant contribution to Chile's compliance with international agreements on environmental protection, improving the standard of living in environmentally damaged territories, promoting sustainable practices, social inclusion, environmental education, environmental justice, development of public policies, policies for addressing climate change, scientific research, innovation, impact investment, renewable energy, nature conservation, and others. Progress in each one of these matters has required, and continues to demand efforts from these organizations that are not exempt from conflict with the productive and political sectors, due to resistance to improvements in matters such as the reduction in the use of agro-toxins, firefighting, territorial development plans, water code reform, environmental participation, decarbonization of the energy matrix, the abandonment of mega-hydroelectricity, regulating and raising the standards of the aquaculture industry, control of animal abuse in the meat industries, use of antibiotics, regulation of environmental liabilities (especially mining), decontamination of saturated areas, etc. **All of these activities undoubtedly contribute to the common good.**

Delving into the motivation driving environmental philanthropy and examining the structure of the agencies involved in these matters, in terms of the type of organization (family, business, or independent), helps to identify, to some extent, what drives them, the scope of their activities and their sources of funding. Environmental issues are the primary focus of independent foundations (25%), to a lesser extent for family foundations (11%) and considerably less for corporations (5%). So what is it that drives these organizations to philanthropy?

Although there is no specific analysis of philanthropic motivations in environmental matters, there are some general cues: "Among individual donors, the main motivation for making social contributions is related to empathy and awareness of economic

opportunities and conditions they had access to. Other social elements also have an influence, such as family tradition and the moral imperative of paying society back, the collective behavior of peers, and an instinctive attitude of reacting to emergencies."¹

Unlike the foregoing, the philanthropic activities of corporations are related to the concept of corporate social responsibility (CSR) in its 3 dimensions: environmental, social and governance. Their philanthropic behavior is strongly linked to the need for legitimacy, reputation and the possibility of negotiating with stakeholders related to the running of the business. RS is part of the company's business, aimed at obtaining benefits for the company. Corporate foundations are seldom funded with endowments. 38% of these organizations depend solely on the corporation, and 61% also have other sources, such as public funds or sales of the foundation itself (10%). It is noteworthy that these organizations mostly focus on education (32%) and welfare and social development (36%).

Business groups are responsible for the works and activities subject to the rules and regulations of the Environmental Impact Assessment System, that make it mandatory to repair, mitigate and compensate for their adverse effects, bearing in mind that these compensatory measures are carried out, to a large extent, by Corporate Foundations linked to a specific investment project. This requires understanding the purpose of these foundations in the institutional environmental philanthropy subsector, determining how much these corporations effectively spend in the care of the environment and the effectiveness of their activities in technical and scientific terms, as well as the source of their funding.

One must bear in mind that, at present, the expense incurred by companies in complying with their environmental legal obligations is considered to be acceptable and not subject to taxes. However, they do not receive tax credits or rebates when complying with their mandatory environmental commitments.

The activities of the purely philanthropic foundations appear to be motivated mainly by altruism, and to a lesser extent by strategic motives, concentrating on people or areas that have been neglected or left behind by social progress; they seek to generate added value for society based on their own capabilities and their "bottom up" strategies, influencing public policies for the country's benefit.

There has been no analysis to date of the motivation of independent foundations (non-corporate or family) that focus on the environment, nor the origin of their funding. However, these are precisely **the foundations that have most focused on environment protection so far, i.e. they are the most**

active ones in the sector. Although one could say that their main motivation is of a strategic nature, it is essential to study their behavior in order to boost their activities and promote the appropriate incentives.

¹ Adolfo Ibáñez University, "Vision and Practice of Donors in Chile" (2017).
Page 14.



Sobre la Legislación Tributaria en Materia de Filantropía

En general, en el sector dedicado a la filantropía hay acuerdo en que la legislación tributaria chilena es engorrosa, compleja, heterogénea, además de que se encuentra dispersa en diversos cuerpos normativos, todas circunstancias que desincentivan las donaciones.

Por regla general, y en ausencia de una ley especial que establezca beneficios tributarios, como ocurre específicamente con el sector que trabaja en el cuidado del medio ambiente, las donaciones están sujetas al Impuesto a las Herencias, Asignaciones y Donaciones, establecido en la Ley 16.271 del año 1965, con cargo al donatario y de carácter progresivo, que va del 1% al 25% del monto donado. Además, respecto a una empresa donante, por regla general, la donación recibe el tratamiento de un gasto rechazado afecto al Impuesto a la Renta (cuya tasa es 40%), es decir, la donación es gravada por el Impuesto a la Renta como si fuera un retiro de utilidades. Además de lo anterior, tales donaciones deben ser autorizadas por los tribunales ordinarios de justicia (insinuación).

La única excepción, como ya se ha señalado, a los impuestos antedichos, corresponde a la actividad de las empresas y de las Fundaciones Empresariales en el ámbito del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, casos que no se encuentran sujetos a las cargas tributarias ya reseñadas.

Es evidente que un procedimiento sencillo y mayores beneficios tributarios contribuiría a fomentar las donaciones. Este diagnóstico llevó a los centros de estudio, y a algunas organizaciones sociales, a mirar con satisfacción la posibilidad de proponer una ley única de donaciones que facilitara los procedimientos e incorporara beneficios.

Sin embargo, no debemos olvidar que el sector que se ha dedicado desde hace más de 30 años a la filantropía ambiental en Chile lo ha hecho hasta ahora excluido, es decir al margen, de cualquier clase de beneficio. Es por ello que es necesario estudiar y comprender detalladamente el origen de sus recursos, y la incidencia en sus presupuestos de las donaciones informales, es decir aquellas no registradas, que no han pagado impuestos, ni recibido beneficios. **Es necesaria una línea de base que nos revele la mejor fórmula para abordar el fomento a la filantropía ambiental.** Una nueva legislación, sea cual fuere, debe cuidar de que existan mecanismos para que la labor que estas OSC no se vea cooptada, debilitada; lo que ocurriría necesariamente si a la par de que son fuertemente gravadas impositivamente (es decir castigadas), se mantuviera su exclusión de los beneficios de la nueva normativa y, a la postre, sujetas a una mayor y más intensa fiscalización de sus cuentas. Esto no significa que se pretenda una menor transparencia, muy por el contrario, creemos que debe perseguirse una institucionalidad que les reconozca derechos, les permita trabajar confiadamente sin discriminaciones arbitrarias, al amparo de que ello otorga mayor estabilidad social y niveles de consenso.

De la misma forma en que hay general aceptación respecto de la necesidad de simplificar los procedimientos para acceder a incentivos tributarios, existe consenso en los beneficios que representa para el éxito de las organizaciones de la sociedad civil que su financiamiento provenga de distintos sectores (Estado y sector privado). Si las organizaciones fuesen financiadas completamente por el Estado, existe el riesgo de cooptación y de que se ponga en riesgo la autonomía de las organizaciones. **Mismo riesgo se corre si se centraliza la decisión respecto de los beneficiarios y proyectos específicos que serían susceptibles de incentivos tributarios, considerando especialmente las características de las referidas fundaciones independientes y el rol que han desempeñado en la materia en términos de mover fronteras culturales y promover políticas públicas a favor de la protección del medio ambiente y del respeto de los derechos ambientales.**

Tax Legislation in Philanthropic Matters

The consensus in the philanthropic sector is that Chilean tax legislation is cumbersome, complex, heterogeneous and broken down into different regulatory bodies, all circumstances that discourage donations.

As a general rule, and in the absence of any specific law establishing tax benefits, as occurs in the sector dedicated to the care of the environment, donations are subject to the Inheritance, Allocations and Donations Tax of Law 16.271 of 1965, to the expense of the donee and of a progressive nature, ranging from 1% to 25% of the amount donated. Furthermore, in terms of the donor company, the donation, as a general rule, is treated as a nondeductible expense subject to income tax (at a rate of 40%), i.e., the donation is assessed by the Income Tax as if it were a withdrawal of profits. In addition to the above, such donations must be authorized by the regular courts of law (insinuation).

The only exceptions to the aforementioned taxes, as previously mentioned, are the activities of companies and corporate foundations within the sphere of the Environmental Impact Assessment System, which are not subject to the aforementioned taxes.

It is evident that a simple procedure and greater tax benefits would help to encourage donations. This diagnosis led the study centers, and some social organizations, to happily consider the possibility of proposing a sole donations law that would facilitate procedures and incorporate benefits.

However, we must not forget that the sector that has been engaged in environmental philanthropy in Chile for more than 30 years has done so while being excluded from any kind of benefit to date. That is why **it is necessary to study and understand the origin of its funding in detail, and the incidence of informal donations in its budgets, i.e., those that are not registered, that have not paid taxes, nor received benefits. A baseline that reveals the best way to deal with the promotion of environmental philanthropy is required.** Any new legislation must take care to ensure that there are mechanisms in place to prevent the CSOs from being co-opted and weakened. This would necessarily occur if they are heavily taxed (i.e. punished), while being excluded from the benefits of the new regulations and, ultimately, subject to a greater and more intense control of their accounts. This does not mean that less transparency is intended. On the contrary, we believe that an institutional framework must be pursued that recognizes their rights, allows them to work confidently without arbitrary discrimination, on the basis that this provides greater social stability and degrees of consensus.

In the same way that there is general acceptance regarding the need to simplify the procedures for accessing tax incentives,

there is consensus that the CSOs would benefit from their funding coming from different sectors (the State and the private sector). If organizations were financed entirely by the State, there would be a risk of co-optation and putting the autonomy of the organizations at risk. **The same risk is run if the decision regarding the beneficiaries and specific projects that would be susceptible to tax incentives is centralized, especially considering the characteristics of the aforementioned independent foundations and the role they have played in the matter, in terms of moving cultural borders and promoting public policies in favor of protecting the environment and respecting environmental rights.**

Sobre el Proyecto de Ley Única de Donaciones

El proyecto de ley única de donaciones que se encuentra actualmente en trámite promueve la creación del Consejo para las Donaciones Privadas, dependiente del Ministerio de Hacienda, cuya tarea principal es, copulativamente, la aprobación de las instituciones donatarias y de los proyectos para efectos de ser susceptibles de recibir donaciones, así como la pérdida de la capacidad para recibir donaciones sujetas a beneficios, o incluso la imposición de sanciones. Resulta evidente que esta instancia podría operar una suerte de veto a algunas OSC, forzándolas a trabajar al margen de cualquier incentivo.

¿Es posible anticipar, por una parte, si el impacto en estas OSC de una situación como la descrita, operaría, a la inversa, como un desincentivo? ¿Podría significar una pérdida, en términos de eficacia y sostenibilidad, en trabajos asociados a políticas públicas, justicia ambiental, cambio climático, energías renovables no convencionales, etc? ¿Podrían los donantes, sean chilenos o extranjeros, privilegiar que sus aportes sean enfocados hacia OSC que sean "reconocidas" como beneficiarias por el Estado?

Resulta alentador que hace pocos días el Ministro de Desarrollo Social, Alfredo Moreno, hiciera mención de que se harían ajustes en el proyecto de ley única de donaciones que se reactivaría durante el segundo semestre de 2018, criticando fundamentalmente este aspecto en concreto, aunque por consideraciones diversas, señalando que "el proyecto original fue cuestionado por estas instituciones por no tener un carácter redistributivo (donaciones indirecta a través de concurso público de proyectos), manteniendo la concentración de las donaciones en unas pocas fundaciones.

En este sentido, Moreno respaldó la iniciativa original, señalando que "creo que las personas tienen que poder optar a qué aportan (donación directa). Hacerlo de otra manera podría significar menos donaciones". (Revista Pulso, 30 de marzo 2018).

A nuestro juicio, el Ministro Moreno tiene razón, **no se puede desatender a las motivaciones filantrópicas forzando a la sociedad civil a priorizar una tarea u otra, ello va en contra de la mera liberalidad que induce a donar.** Dicho de otra manera, el que dona lo hace porque quiere, en aquello que considera que optimiza el uso de sus recursos y no sólo motivado por la búsqueda de incentivos tributarios.

Pese a lo anterior, Según Moreno, es un hecho que el sector abocado a la filantropía presenta problemas en la distribución de los recursos. El 75% de las donaciones al Banco de Proyectos se destina a las mismas Fundaciones, tendencia que, es de

esperar, afecte al sector de la filantropía ambiental, y constituye otro de los desafíos que la nueva normativa deberá abordar.

Pese a que los donantes no persiguen sólo la obtención de beneficios tributarios, menos aún cuando se trata de individuos, se ha demostrado que estos si contribuyen a aumentar las donaciones. En Chile, los beneficios tributarios pueden tomar algunas de las siguientes formas: (1) Las exenciones al Impuesto a las Herencias y Donaciones para el donatario; (2) las deducciones de la base imponible, y; (3) los créditos para el donante con relación al Impuesto a la Renta.

El proyecto de Ley Única de Donaciones, a nuestro juicio positivamente, contempla las 3 formas señaladas, beneficiando tanto a empresas, como a individuos.

Del análisis realizado es posible anticipar que los sectores de la filantropía ambiental que se verían fuertemente beneficiados con la clase de incentivos que propone el proyecto de ley única de donaciones, corresponde a aquellos de menor conflictividad; entre ellos la conservación y la responsabilidad social empresarial, incluso cuando su carácter es reparatorio, en el ámbito del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.

The Sole Donations Bill of Law

The sole donations bill of law currently being discussed proposes the creation of the Council for Private Donations, dependent on the Ministry of Finance, whose main task would be to approve donating agencies and projects that can receive donations, as well as the prohibition of receiving donations subject to benefits, or even the imposition of sanctions. It is evident that this body could impose a kind of veto against some CSOs, forcing them to work outside of any incentive.

Could one expect the impact on these CSOs of a situation like the one described above to operate inversely, as a disincentive? Could it entail a loss of effectiveness and sustainability in initiatives involving public policies, environmental justice, climate change, non-conventional renewable energies, etc.? Could Chilean or foreign donors focus their donations on CSOs that are "recognized" as beneficiaries by the State?

It is encouraging that a few days ago the Minister of Social Development, Alfredo Moreno, mentioned that adjustments would be made to the sole donations bill of law that will be reactivated in the second half of 2018, criticizing this aspect in particular, although pointing out for different reasons that "the original project was questioned by these institutions for not being part of a redistributive nature (indirect donations through public bidding on projects) concentrating donations in a few foundations."

In this regard, Moreno backed the original proposal, noting that "I believe that people should be able to choose what they donate to (direct donation). Doing it any other way, could mean less donations." (Pulso Magazine, March 30, 2018).

In our opinion, Minister Moreno is right: we **cannot ignore philanthropic motivations, forcing civil society to prioritize one task or another; this goes against the benevolence that leads one to donate.** In other words, those who donate do so because they want to, to what they consider to be the best use of their donations, and not only motivated by the search for tax incentives.

Despite the above, Moreno says that it is a fact that there are resource distribution issues in the philanthropical sector. 75% of donations to the Projects Bank go to the same Foundations, a trend that will hopefully affect the environmental philanthropy sector, constituting another one of the challenges that the new legislation must address.

Despite the fact that donors do not only pursue the obtainment of tax benefits, and even less so when they are individuals, it has

been shown that they do contribute to increasing donations. The following are some of the tax benefits in Chile: (1) Inheritance and Donation Tax exemptions for the donee; (2) deductions from the taxable base income, and; (3) Income Tax credits for the donor.

In our opinion, the Sole Donations Bill of Law positively considers the aforementioned 3 benefits, favoring companies as well as individuals.

From the analysis performed, one can anticipate that the environmental philanthropy sectors that would greatly benefit from the kinds of incentives proposed by the sole donations bill of law are the less conflictive ones; among them, conservation and corporate social responsibility, even when they are of a compensatory nature, within the scope of the Environmental Impact Assessment System.



Incentivos Tributarios en el SEIA y Biobancos

Un breve comentario respecto del otorgamiento de incentivos tributarios a las compensaciones ambientales obligatorias en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Las referidas compensaciones corresponden a las medidas que debe adoptar la empresa para resarcir impactos ambientales cuya envergadura es de tal magnitud que no es posible repararlos o mitigarlos, en otras palabras, se trata derechamente de daño ambiental. La normativa actual exige que las medidas de compensación tengan por finalidad producir o generar un efecto positivo alternativo y equivalente a un efecto adverso identificado, es decir que debe hacerse la sustitución de los recursos naturales o elementos del medio ambiente afectados por otros de similares características, clase, naturaleza, calidad y función, los que representan requisitos de equivalencia. **Cuando esto se refiere a "biodiversidad" se habla de una pérdida neta cero de biodiversidad. Hay abundante literatura científica que cuestiona las metodologías para llegar a determinar tal "equivalencia" e incluso la considera imposible, por ello a nuestro juicio debiera exigirse siempre una ganancia neta en términos de los elementos ambientales afectados. Para ello la promoción de la restauración ecológica debiera explorarse como una alternativa interesante.**

Por otra parte hay consenso e incluso es legalmente exigible, que la medida de compensación sea aplicada como la última alternativa, dado que el impacto es considerado indeseable por la norma, pero absolutamente ineludible (de ultima ratio). **En la misma lógica las compensaciones sólo debieran ser implementadas al amparo de un ordenamiento territorial previamente diseñado, en el marco de una planificación estratégica, considerando límites a la compensación, por la imposibilidad de reemplazar el componente dañado, por la vulnerabilidad, pérdida de funciones y servicios ecosistémicos;** todos aspectos que hoy, o no se consideran dentro de nuestra legislación, o son precariamente implementados, sin que haya progreso alguno en su implementación.

El Proyecto de Ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas contempla la creación de biobancos que corresponderían a una cartera de proyectos de conservación, no de restauración, en territorios determinados, que generarían créditos en biodiversidad, que deberán ser cuantificados con base en criterios de equivalencia, no de ganancia neta, los que podrían ser utilizados por los titulares de proyectos o actividades que, en el marco de la evaluación ambiental de los mismos, deban proponer medidas para compensar los impactos en biodiversidad.

Los biobancos podrían considerarse una estrategia atractiva si, a la par de su implementación, hubiera avances

sustantivos en los aspectos antes señalados, referidos a un ordenamiento territorial previamente diseñado.

En la misma línea antes referida, y sólo en base a experiencia de campo, a título de hipótesis que debiera ser confirmada con análisis acabados, en la actualidad las empresas tienden a reparar, mitigar y compensar impactos ambientales con beneficios sociales a las comunidades afectadas por sus proyectos (aún cuando esta situación no debiese ser legalmente tolerada). Ello se debe posiblemente, no sólo a intentar mejorar su capacidad de negociación, sino también a que el desarrollo social cuenta con importantes incentivos tributarios, al contrario de lo que ocurre con el cuidado del medio ambiente. Promover estos incentivos podría contribuir a movilizar los recursos empresariales hacia un mejor desempeño en materia ambiental. Entonces, para efectos del cuidado del medio ambiente el resultado final pudiera ser mejor que el que se obtiene actualmente.

Tax Incentives in the EIAS and Biobanks

A brief comment regarding the granting of tax incentives to mandatory environmental compensation in the Environmental Impact Assessment System. The aforementioned compensations are the measures that the companies must take for compensating environmental impacts whose scope is of such magnitude that it is impossible to repair or mitigate them, in other words, outright environmental damage. The existing regulations require compensatory measures to produce or generate an alternative positive effect equivalent to an identified adverse effect; in other words, natural resources or environmental elements affected by others of similar characteristics, class, nature, quality and function, must be substituted with equivalent requirements. When referring to "biodiversity," this is known as a zero-net loss of biodiversity. There is abundant scientific literature that challenges the methodologies used for determining such "equivalence," and even considers it impossible. Thus, in our opinion, a net gain in terms of the affected environmental elements should always be required. Hence, the promotion of ecological restoration should be explored as an interesting alternative.

On the other hand, there is consensus, and it is even legally required, that the compensatory measure be applied as a last resort, given that the impact is considered undesirable by law, but absolutely unavoidable (as a last resort). Following the same reasoning, compensation should only be implemented under a previously designed territorial order, within the framework of strategic planning, considering limits to compensation, due to the impossibility of replacing the damaged component, vulnerability, loss of functions and exosystemic services; all aspects that are currently not considered in our legislation, or are precariously implemented, without any progress in their implementation.

The bill of law that creates the Biodiversity and Protected Areas Service, contemplates the creation of biobanks comprising a portfolio of conservation projects, not restoration projects, in specific territories, that would generate biodiversity credits, which should be quantified based on equivalence criteria, and not net profit, which can be used by the owners of projects or activities, and which should propose measures for compensating impacts on biodiversity in their environmental assessment framework.

Biobanks could be considered an attractive strategy if, together with their implementation, there were substantial progress in the aforementioned aspects.

Along these same lines, and only based on field experience, as a hypothesis that should be confirmed with detailed analysis, companies currently tend to repair, mitigate and compensate environmental impacts with social benefits to the communities affected by their projects (even though this situation should not

be legally tolerated). This is possibly due not only to the fact that they try to improve their negotiating capacity, but also to the fact that social development has important tax incentives, contrary to what happens with the care of the environment. Promoting these incentives could help mobilize business resources towards better performance in environmental matters. So, for environmental protection purposes, the final result could be better than what is currently obtained.

Conclusiones

La necesidad de un diagnóstico específico sobre la filantropía en temas medioambientales tiene varias aristas necesarias de analizar y, en los tiempos actuales, resulta urgente avanzar en cada una de ellas.

Para comenzar, el diagnóstico debe incluir el análisis del comportamiento de todos los actores y como se encadenan, la fuente de los recursos para la realización de las diversas actividades y las motivaciones de cada una de ellas.

Una propuesta, en base al diagnóstico, es que las ONG medioambientales que integren el registro de organizaciones dentro de la ley única de donaciones –en base a ciertos requisitos- a pesar de que no sean acreedoras de beneficios tributarios; no sufran de cargas procesales y tributarias excesivas. Con ello podría evitarse que existan vetos políticos y, que se creen desincentivos de tal magnitud que impidan el importante trabajo y desarrollo de estas organizaciones que son gravitantes en materia de progreso medioambiental a nivel país.

En materia de incentivos tributarios a la RS en el ámbito del SEIA nos parece que tiene que ir de la mano con el desarrollo del ordenamiento territorial. Si hay perdida de ecosistemas las compensaciones deben significar una ganancia neta en biodiversidad, deben existir incentivos a la restauración y aceptar que hay lugares incompensables definidos por el ordenamiento territorial. Así tampoco podría legitimarse que lugares que son objeto de compensaciones, puedan ingresar al SEIA.

Conclusions

The need of a specific diagnosis about philanthropy on environmental issues has various angles to analyze, and in actual times it's urgent to move forward in each one of them.

To begin, the diagnosis has to include the analysis of all actors and their interactions, the source of the resources destined for the different environmental activities and what drives each one of them.

Using that diagnosis, a proposal would be that the environmental NGOs that are listed in the sole donations bill of law – based on certain requirements – if they are not beneficiaries of tax benefits, they don't suffer excessive procedural and tributary charges. This could prevent political vetoes that create disincentives of such magnitude that could delay (or stop) the important work and development of these organizations, which are important in terms of environmental progress at a country level.

In terms of tax incentives to mandatory compensations in the Environmental Impact Assessment System (EIAS), we believe it should move forward together with a national territorial planning development. If there are ecosystem losses, mandatory compensations should aim to net gain in terms of biodiversity, creating incentives upon restoration work and accept the fact that there are some areas that can not be compensated or replaced, defined in the territorial planning. In the same way, places that are destined for compensation matters should not qualify to enter the EIAS.



Bibliografía

Bibliography

1. Proyecto de Ley que Crea un Régimen Unificado para los Beneficios Tributarios por Donaciones Efectuadas a Entidades sin Fines de Lucro.
2. Centro de Estudios Públicos de la Universidad Católica, "Mapa de las Organizaciones de la Sociedad civil 2015" (2016).
3. Ignacio Irarrázabal LL. y JULIO GUZMAN C, "Incentivos tributarios para instituciones sin fines de lucro: experiencia internacional" (2000).
4. Centro de Filantropía e Inversiones Sociales, Universidad Adolfo Ibáñez, "Filantropía Ciudadana en Chile" (2018).
5. Centro de Filantropía e Inversiones Sociales, Universidad Adolfo Ibáñez, "Filantropía Institucional en Chile" (2017).
6. Universidad Adolfo Ibáñez, "Estrategia en los aportes sociales de las Empresas" (2017).
7. Universidad Adolfo Ibáñez, "Visión y Práctica de los Donantes en Chile" (2017).
8. Ley N°19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente.
9. Guía para la Compensación de Biodiversidad en el SEIA.
10. ISO 26000 de la Organización Internacional de Normalización.
11. Centro de Estudios Públicos de la Universidad Católica, "Fortaleciendo las organizaciones de la sociedad civil: propuestas para impulsar las OSC en Chile. Sociedad en Acción" (2017).
12. Centro de Estudios Públicos de la Universidad Católica, "Fortaleciendo la sociedad civil: el rol de los incentivos tributarios en las donaciones. Sociedad en Acción" (2017).
13. Centro de Estudios Públicos de la Universidad Católica, "Mapa de las organizaciones de la sociedad civil. Sociedad en Acción" (2017)
1. Bill of Law that Creates a Unified Tax Benefits Regime for Donations made to Nonprofit Entities.
2. Center for Public Studies of the Catholic University, "Map of Civil Society Organizations, 2015" (2016).
3. Ignacio Irarrázabal LL. and JULIO GUZMAN C, "Tax incentives for nonprofit institutions: international experience" (2000).
4. Center for Philanthropy and Social Investment, Adolfo Ibáñez University, "Citizen Philanthropy in Chile" (2018).
5. Center for Philanthropy and Social Investment, Adolfo Ibáñez University, "Institutional Philanthropy in Chile" (2017).
6. Adolfo Ibáñez University, "Strategy in social contributions of companies" (2017).
7. Adolfo Ibáñez University, "Vision and Practice of Donors in Chile" (2017).
8. Law No. 19.300 on General Environmental Guidelines.
9. Guide for Compensating Biodiversity in the EIAs.
10. ISO 26000 of the International Standardization Organization.
11. Center for Public Studies of the Catholic University, "Strengthening of civil society organizations: proposal for advancing SCOs in Chile." Society in Action" (2017).
12. Center for Public Studies of the Catholic University, "Strengthening civil society: the role of tax incentives in donations. Society in Action" (2017).
13. Center for Public Studies of the Catholic University, "Map of Civil Society Organizations. Society in Action" (2017)